



Por Alicia Kirchner, ministra de Desarrollo Social

"Gobernar es dar trabajo", decía Juan Domingo Perón. Y no pasó de moda, aunque en tiempos no muy lejanos el trabajo pareció un artículo de lujo. Está en la génesis de la ideología fundante de la justicia social. Es la clave de la cuestión social.

El hombre y la mujer que trabaja construyen, organizan, proyectan. Reconocer el valor subjetivo del trabajo, es mucho más que discutir un salario, por aquello de que no es una mercancía, como lo consideran los liberales. Solo aquellos que alguna vez han perdido el trabajo, pueden dimensionar cómo se quiebra la dignidad humana. El trabajo es la libertad creadora. Sin trabajo no es posible sentirse incluido en la sociedad. Pero hablamos de empleo decente, que permite mejores condiciones de vida de los trabajadores.

Y el trabajo está íntimamente ligado a la construcción y consolidación de la familia. Junto con la educación, edifica al sujeto histórico de las transformaciones sociales.

Nuestro país conoció la justicia social que aunque se quiso, nunca se pudo borrar de la memoria colectiva de las nuevas generaciones. Y fue justamente cuando la acción del Estado reconocía la ciudadanía de los trabajadores. Por eso el trabajo continúa siendo el punto de referencia para definirnos con relación al conjunto social. Es la manera a través de la cual nos integramos activamente a nuestra dinámica colectiva como Nación.

Y aún en las peores crisis no dejamos de buscar el trabajo. Sino que lo digan los movimientos de desocupados, las organizaciones de recicladores urbanos o el esfuerzo de los trabajadores de las empresas recuperadas, a las que un Estado presente nunca abandonó.

Este modelo, cuya construcción en el marco del Proyecto Nacional y Popular, fue iniciado en 2003 por Néstor Kirchner y continuado ahora por la presidenta, Cristina Fernández, estableció como política de Estado estratégica, la promoción del trabajo y la familia. Más de cinco millones de puestos de trabajo no pueden ser obviados ni ocultados.

Tengamos memoria. Muchos de nuestros dirigentes políticos adhirieron fervorosamente a la

teoría lanzada en 1995 por Jeremy Rifkin, sobre el fin del trabajo. Y hasta lo pusieron en práctica desde el gobierno. Valoraron más las nuevas tecnologías que el trabajo, que no deben ser contradictorias siempre que prevalezcan el hombre y la mujer que trabajan. Vieron la forma más rápida de bastardearlo y precarizarlo para someter a los trabajadores. Los derechos sociales de los trabajadores fueron vulnerados toda vez que se interrumpieron los procesos democráticos. Pero también al recuperarse la democracia formal. Cuando el Estado se achicó para abrirle las puertas a las corporaciones transnacionales y a las elites económicas y financieras nacionales, millones de trabajadores fueron empujados a la pobreza y la miseria. Se quebró el tejido social y vimos como hombres, mujeres y jóvenes deambulaban mendigando un puesto de trabajo, generalmente en negro y sin derechos sociales. Eran apenas las migajas que caían de la mesa de los poderosos. A esa indignidad la llamaron el derrame del vaso, cuando el neoliberalismo culminara el proceso de acumulación para unos pocos.

Tenemos el sano orgullo de mirar a los ojos a hombres y mujeres que exigían ayuda en el 2003 en las puertas del Ministerio de Desarrollo Social. Hoy la mayoría de esos trabajadores desocupados fueron incluidos, sus derechos restaurados y su lucha hoy transita la legitimidad del ascenso social. Nosotros distinguimos a la persona como titular de derecho y a los procesos colectivos como estrategias fundamentales.

Desde el 2003 se han reducido sustancialmente los índices de desempleo, pero sobre todo, cayo la tasa de precariedad del empleo. Los trabajadores han recuperado la negociación colectiva y creció exponencialmente después de muchos años el salario mínimo y vital como política de ingresos, que estaba congelado en el tiempo. Esto supone también que se incrementó la participación salarial en el Producto Bruto Interno. Se avanzó en los mecanismos legales para el incremento de ingresos periódicos de los haberes de los jubilados, junto con las jubilaciones anticipadas para los trabajadores cuyos aportes y contribuciones fueron confiscados en el tiempo.

Todo esto no es ficción. Pero no nos quedamos ahí. Hemos propiciado la creación de cerca de un millón de puestos de trabajo de la economía solidaria, que explica un ingreso del 10 % del PBI. A esto lo llamamos inversión social, en el entendimiento de que la pobreza debe ser abordada desde el trabajo y también desde la educación y la salud, trabajando en el acceso a las oportunidades.

En el Día del Trabajo, reafirmamos que no pactamos con el fin del trabajo, como no lo hacemos con la pobreza. Nuestro objetivo político es que los argentinos nos realicemos en un país que se desarrolle en justicia social, con participación e igualdad de derechos. Nos salvamos todos, porque nadie se realiza en una sociedad que no se realiza.